

Bogotá D.C., 30 de abril de 2025

Señores

JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PASTO - NARIÑO

E. S. D.

REFERENCIA: Medio de Control - Reparación Directa

DEMANDANTE: Segundo Víctor Pantoja Jurado

DEMANDADAS: Agencia Nacional De Infraestructura – ANI, Concesionaria Vial Unión Del Sur – Sacyr Construcción Colombia SAS.

RADICADO: 52001333300920240002300

Asunto: Contestación de demanda

WILSON GÓMEZ HIGUERA, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con C.C. 79.950.684 de Bogotá, abogado titulado y en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 115.907 del C.S. Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado de la sociedad **SACYR CONSTRUCCIÓN COLOMBIA S.A.S.** identificada con NIT 900.657.570-1, en adelante “**Sacyr**”, quien ha sido vinculada como demandada y llamada en garantía, me permito contestar la demanda de la referencia, en los siguientes términos:

I. Oportunidad

El Despacho, mediante auto proferido en audiencia pública celebrada el 11 de marzo de 2025, y comunicado a mi representada mediante correo electrónico de la misma fecha, decidió:

“DECLARAR LA NULIDAD DE LO ACTUADO respecto de **SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.** como miembro del **CONSORCIO SH**, a partir de la notificación de la providencia proferida el 23 de mayo de 202413, **por la cual se admitió la demanda. SEGUNDO. - ORDENAR** por secretaría se realice la notificación personal en debida forma de la admisión de la demanda a la demandada **SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S.** como miembro del **CONSORCIO SH**, cuyo traslado por el término de treinta (30) días, se contará según lo dispuesto en los artículos 172 y 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. **TERCERO. - Vencido el término de traslado mencionado, se continuará con el trámite del proceso respecto a SACYR CONSTRUCCION COLOMBIA S.A.S., esto es la notificación del llamamiento en garantía y se continuará hasta llegar a la etapa en que nos encontramos, audiencia inicial, aclarando que las actuaciones surtidas respecto a los demás demandados y llamados en garantía conservarán su validez”.**

Teniendo en cuenta lo anterior, el término para contestar la demanda inicia a partir del día 12 de marzo del 2025, por lo que los treinta (30) días de traslado culminan

el treinta (30) de abril del año en curso, por tanto, el presente escrito se radica dentro del término y la oportunidad procesal.

II. Pronunciamiento sobre los hechos

En cuanto al hecho PRIMERO. No es cierto que la construcción de la vía mencionada en el hecho haya sido construida por la ANI, la Concesionaria Vial Unión del Sur y el Consorcio SH. De conformidad con el Contrato de Concesión bajo el esquema de APP No.015 de 2015 – el Contrato de Concesión - ejecutado por la Concesionaria Vial Unión del Sur (Prueba 2), la obligación de construcción corresponde a la sociedad contratista, asumiendo la ANI y Sacyr, roles y responsabilidades diferentes. Se trata de una imprecisión que afecta el correcto entendimiento de la relación jurídica existente entre las sociedades mencionadas.

En cuanto al hecho SEGUNDO. No es cierto que la sociedad que represento haya “dejado afectaciones graves” en los predios que hacen parte del trazado del Contrato de Concesión. Es claro que una obra de infraestructura como la ejecutada con el Contrato de Concesión genera afectaciones a predios de particulares que, por obligación de quien actúa como contratista, deben ser reparados o indemnizados.

Para el caso que nos ocupa, el demandante recibió dos pagos por concepto de las indemnizaciones que, en derecho le correspondía recibir, tal y como consta en los contratos de transacción que se aportan como Pruebas 4, 5 y 6.

En cuanto al hecho TERCERO. Es parcialmente cierto que el demandante haya sido, o sea actualmente, el titular de los dos predios relacionados en el hecho, situación que deberá acreditar en el presente proceso. No es cierto que existan afectaciones sin reparar o indemnizar en los predios.

En cuanto al hecho CUARTO. Es parcialmente cierto que, dentro de las afectaciones normales que ocasiona una obra como la que se ejecutó en cumplimiento del Contrato de Concesión se generan deslizamientos de rocas o material proveniente de excavaciones. No obstante, las tareas de remoción y limpieza se realizaron en el momento que determinaba la obra, así mismo, en los casos en los que con estos deslizamientos se generó algún daño, estos fueron reparados. Esto se evidencia en los contratos de transacción que se suscribieron con el demandante, y que se aportan como pruebas 4, 5 y 6.

En cuanto al hecho QUINTO. No me consta, deberá probar el demandante que el predio al que se refiere resulta “inservible”, afirmación que, desde ahora, se afirma que no es cierta. El demandante reclama acceso vehicular a un predio que no lo tenía, con el único fin de recibir una compensación económica adicional y que no tiene ningún soporte legal.

Tal y como consta en el certificado de tradición correspondiente al Folio de Matrícula Inmobiliaria 244-93031, el demandante celebró compraventa a la ANI el 3 de agosto

de 2020, sin argumentar o reclamar lo que ahora pretende exponer y presentar como un perjuicio. En efecto, al revisar el RUPA correspondiente a este predio, que se anexa como Prueba 7, se evidencia que no existen las mejoras o accesos que el demandante pretende reclamar. Si estas realmente hubieran existido, no solo se verían relacionadas en la ficha predial, sino que, en caso de alguna afectación, esta se encontraría reflejada en la indemnización que debía recibir el demandante.

Como soporte de la falta a la verdad por parte del demandante, me permito aportar las imágenes del acceso con el que cuenta actualmente el inmueble, que le permitirá al Despacho entender que no es cierto que este haya quedado incomunicado o “inservible”.



Como se aprecia en la imagen, esta fotografía corresponde al 29 de mayo de 2024, y refleja que al inmueble sí se puede acceder. Veamos la continuación del acceso con el que cuenta el predio:



29 may 2024 3:33:29 p. m.





De conformidad con lo anterior, es claro que el predio cuenta con acceso y las falaces afirmaciones de la demanda se deben tener como una prueba de la mala fe que le asiste al actor.

Adicionalmente, sobre el concepto de predio “inservible”, además de ser una apreciación personal y sin soporte del actor, a través de esta imagen se podrá apreciar que el inmueble es un predio rural igual a los otros del sector, y si en algo no le agrada a su propietario, esto jamás podrá ser responsabilidad de Sacyr o de los demás integrantes de la parte demandada. Incluso, se evidencia que el demandante allí continúa cultivando y lo explota económicamente. Veamos:





Estas imágenes se aportan como anexo 18.

En cuanto al hecho SEXTO. No es cierto. Deberá probar el demandante lo dicho, y para ello tendrá que demostrar la relación existente entre la ejecución de la obra y la supuesta afectación al sistema de riego que afirma tener. No existe nexo de





causalidad alguno entre un hecho que, además de no tener ningún soporte, no se puede originar por la ampliación de una vía.

En cuanto al hecho SÉPTIMO. No es cierto. Como consecuencia normal de una obra como la ejecutada en desarrollo del Contrato de Concesión, es normal que pueda existir desplazamiento de material proveniente de los cortes o excavaciones. Sin embargo, para el caso del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No 244-93030, estas fueron retiradas, tal y como lo afirma la parte actora. No es cierto que se trate de una labor incompleta o inconclusa, cosa distinta es que el actor pretenda obtener un valor indemnizatorio que no le corresponde, acudiendo a la tergiversación de la realidad y a afirmaciones descontextualizadas y sin soporte probatorio.

Como podrá apreciar el Despacho en la fotografía que se adjunta, este inmueble, no solo está libre de las rocas que afirma el actor, sino que se encuentra cultivado y en explotación económica. Las imágenes que aporta el demandante no corresponden a la realidad actual y, evidentemente, son un indicio de su mala fe. Veamos:



Por otro lado, no es cierto que exista afectación de cercas o ninguna otra mejora sobre el inmueble. Deberá acreditarlo el demandante con soportes que demuestren,





no solo la existencia de estas, sino la relación de causalidad entre las supuestas afectaciones y el actuar de Sacyr, como miembro del Consorcio SH.

En cuanto al hecho OCTAVO. No es cierto. Como resultado de la obra realizada, el predio ahora cuenta con una obra que ha mejorado la forma en que las aguas puedes correr colina abajo. Es un movimiento natural de las aguas, que siempre ha existido en el predio, pero el demandante pretende ahora que, como resultado de la obra pública, su predio cuente con una canalización de aguas de lluvia que, evidentemente, si llegare a ser necesario, debe asumir el propietario, y no el Estado o quienes ejecutan las obras correspondientes. Debe entender el propietario que cada medida que se tome en la obra debe responder a los diseños del Contrato de Concesión, y a las normas técnicas vigentes, sin que Sacyr deba asumir el valor de todas las obras que los propietarios de predios consideren que deben realizarse en sus inmuebles.

Veamos el estado real de esta parte del predio, que evidencia las faltas a la verdad que contiene la demanda:





Estas imágenes se adjuntan como Prueba 17.



En cuanto al hecho NOVENO. Es cierto que existió una venta parcial del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 244-930331 por parte del demandante a la ANI, con el fin de realizar la sobras propias del trazado vial.

No es cierto que en el acta a la que se refiere el demandante exista un reconocimiento de las afectaciones que relaciona en el hecho. Basta con leer, de manera leal y detenida, el contenido del documento aportado por el demandante para concluir que en ella no hay ningún compromiso de retirar escombros, realizar accesos, restablecer sistemas de riego o reparar cercas. Lo que existen son una serie de solicitudes plasmadas en un documento denominado “Registro de Visitas”, que está lejos de ser un “acta de compromiso”, y allí consta lo siguiente:

Conclusiones:

- * Propietario accede a firmar escritura.
- * Solicita retiro de escombros por parte de SH.
- * Solicita se restablezca el sistema de riego por parte de SH.
- * Solicita la cerca de la primera compra linderos oriente se coloque en el lindero del predio, con el fin de restablecer el cerramiento afectado por la obra y verificar acceso del predio.

Adicionalmente, debe apreciar el Despacho el “Registro de Visitas” de 12 de noviembre de 2021, en el que se evidencia que, desde esta fecha, el demandante está solicitando la reparación por los mismos hechos que constituyen los supuestos daños que reclama. Este documento es el mismo formato oficial del Contrato de Concesión ejecutado por la Concesionaria Vial Unión del Sur, y su objetivo fue atender una de las peticiones del demandante, relacionadas con la ejecución del Contrato de Concesión. En las conclusiones se observa que lo allí contenido, también, son solicitudes del demandante y se le exige que acredite que existía un sendero peatonal como el reclamado y que, para efectos de determinar la solicitud de limpieza del inmueble, la petición se iba a dirigir al área encargada. Veamos:

Conclusiones:

- El señor solicita se le realice acceso de tipo peatonal hacia la vivienda desde la traza de la vía.
- Se le solicita a propietario evidencias que avalen que existía un sendero peatonal hacia la vivienda.
- Se le informa que en cuanto a la solicitud de limpieza del predio será remitido al área encargada.

Por lo tanto, es claro que se trata de una nueva falacia de la demanda lo narrado en este hecho, en el que se pretende manipular los textos de los documentos aportados con el único fin de crear confusión en el conocimiento que debe proporcionarse al operador judicial.

En cuanto al hecho DÉCIMO. No es cierto. El demandante pretende acomodar su dicho al término de caducidad propio del medio de control de reparación directa, no obstante, es claro que los hechos que el actor pretende presentar como daños ocurrieron en fecha anterior al mes de diciembre de 2022. Para ello, deben tomarse como evidencias las infundadas reclamaciones contenidas, no solo en el formato “Registro de Visita” de fecha 12 de noviembre de 2021, que se aporta como Prueba 3, sino en las siguientes peticiones:

- 1º de octubre de 2021, en la que reclama el mismo acceso a la vivienda y la limpieza por caída de rocas. Prueba 12.
- 1 de diciembre de 2021, en la que solicita limpieza de rocas, y problemas con una alcantarilla, que también se reclama en esta demanda. Prueba 13.
- 12 de julio de 2021, en la que solicita el retiro de escombros. Prueba 11.
- 6 de julio de 2020, en la que solicita los accesos a los inmuebles de su propiedad. Prueba 9.
- 24 de febrero de 2020, en la que solicita la limpieza de los lotes. Prueba 8.

En cuanto al hecho DÉCIMO PRIMERO. No es un hecho relacionado con las pretensiones exigidas, sino la afirmación de haber agotado un requisito de procedibilidad. No obstante, es preciso que el Despacho compare la fecha de radicación, esto es, el 13 de diciembre de 2023, con la fecha en que el demandante conoció los hechos que hoy reclama como daños, que viene evidenciando, como mínimo, desde el 20 de febrero de 2020. Esto allanará el camino de cara al vencimiento del término de caducidad propio de este tipo de medios de control.

III. Pronunciamiento sobre las Pretensiones

Me opongo a las pretensiones de la demanda por carecer de fundamento jurídico y fáctico, con base en los hechos y excepciones acá planteados. La pretensión primera no podrá prosperar pues es claro que los supuestos daños que reclama el actor no se encuentran probados, por el contrario, se ha demostrado que el demandante ha manipulado hechos con el fin de crear confusión en el entendimiento del Despacho. En consecuencia, la pretensión indemnizatoria segunda no está llamada al éxito, pues depende de que se declare una inexistente responsabilidad en cabeza de Sacyr.

En cuanto a la indemnización por el retiro de escombros, es claro que estos fueron retirados en su momento, y que lo pretendido no es nada diferente que un intento de enriquecerse sin causa legal válida.

Sobre los daños relacionados a las cercas o alambres, no existe una sola prueba que acredite su existencia previa al inicio de las obras, y mucho menos, que estas se hayan visto afectada por la acción de Sacyr o de cualquiera de los demandados.

El canal de encause reclamado no puede ser costeadado por la Nación a través de la obra que se realiza, pues se trata de una adecuación en un predio particular, que no tiene ninguna relación con los trabajos realizados en ejecución del Contrato de Concesión. El demandante es propietario de un inmueble por donde deben correr aguas lluvia y demás, y será su responsabilidad realizar las obras que el inmueble demande por su condición o ubicación natural.

El predio con matrícula 244-930331 no ha quedado incomunicado, por el contrario, como se evidencia con las imágenes que se aportan como Prueba 18, este cuenta con un acceso y está siendo explotado económicamente.

Sobre el valor de las mangueras y mano de obra del supuesto sistema de riego, debo insistir en que no existe una sola prueba de que este existiera y, menos aún, de que fuera afectado por la obra realizada en ejecución del Contrato de Concesión. Adicionalmente, como se entiende de las Pruebas 4 y 5, el demandante ya recibió una compensación por las mismas mangueras en el año 2019, y lo que ahora pretende es volver a cobrar esa suma de dinero, argumentando, sin sustento alguno, que el inmueble no cuenta con agua.

IV. Fundamentos de derecho

- **Fundamento de la responsabilidad del Estado y título de imputación aplicable**

La cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado tiene su fuente en el artículo 90 de la Constitución de 1991, norma que consagra el derecho a la reparación de los perjuicios causados por las actuaciones de las autoridades públicas, cuando tales daños sean antijurídicos y cuando los afectados no estén en el deber jurídico de soportar esos daños. Adicionalmente, debe existir imputación jurídica del hecho dañoso a un agente estatal.

A la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 que contiene la norma citada, jurisprudencialmente se afirmó que la responsabilidad patrimonial del Estado era objetiva, posición que fue rectificada para sostener que el daño antijurídico y la imputación son los elementos axiológicos de la responsabilidad, comprendiéndose en aquella todos los regímenes de responsabilidad (objetivos y subjetivos) que hasta ese entonces había decantado la jurisprudencia, siendo el principal, el de la falla del servicio.

En relación con esta última, el H. Consejo de Estado ha precisado que surge cuando la administración viola el contenido obligacional establecido a su cargo por la Constitución y la ley y que se exonerará de responsabilidad si prueba que la vulneración de ese contenido obligacional no ha tenido ocurrencia o que se ha producido una ruptura del nexo causal mediante la demostración de una causa extraña como la fuerza mayor, el hecho de la víctima o el hecho de un tercero. Dice la corporación citada sobre el título de imputación mencionado:

“En términos generales, la falla del servicio surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación –conducta activa u omisiva– del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del

Estado, lo cual constituye una labor de diagnóstico por parte del juez, de las falencias en las que incurrió la Administración y que implica un consecuente juicio de reproche. Por su parte, la entidad pública demandada podrá exonerarse de una declaratoria de responsabilidad si prueba que su actuación no constituyó una vulneración a ese contenido obligacional que le era exigible, es decir, que acató los deberes a los que se encontraba obligada o, si demuestra que el nexo causal era apenas aparente, mediante la acreditación de una causa extraña: fuerza mayor, hecho exclusivo y determinante de la víctima o, hecho también exclusivo y determinante de un tercero^{1, 2}.

Entonces, la responsabilidad de la administración bajo el título de imputación de falla del servicio surge a partir de la comprobación de la existencia de tres elementos: i) el daño sufrido por el interesado; ii) la falla del servicio propiamente dicha, consistente en el mal funcionamiento del servicio porque éste no funcionó cuando debió hacerlo o, lo hizo tardía o equivocadamente y; iii) una relación de causalidad entre estos dos elementos, es decir, la comprobación de que el daño se produjo como consecuencia de la falla del servicio.

En materia de accidentes por falta de señalización de un riesgo o peligro en una vía pública o falta de remoción de obstáculos en la vía, la Jurisprudencia del H. Consejo de Estado³ reitera que el título de imputación es el de falla en el servicio, teniendo en cuenta que es de cargo de la Administración ejercer el control, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que ordenan la señalización y advierten los peligros.

No obstante, lo anterior, se debe analizar por parte del Juzgador si la Administración hubiera podido reaccionar a una falta de mantenimiento o conservación, pues existirán eventos en los cuales, pese a que la Administración tienen a su cargo dichos deberes, no existe nexo causal entre su actuación y el accidente porque se trata de un caso fortuito o fuerza mayor, sin que la administración hubiera podido evitarlo por ningún medio.

Como se detallará más adelante, en el presente caso no estamos en presencia de un daño antijurídico, ni nos acompaña la imputación fáctica y jurídica y, por ende, no se configura un nexo causal, entre el hecho generador del daño y la actuación de Sacyr como integrante del Consorcio SH. De este modo, ante un análisis jurídico de la cláusula constitucional de responsabilidad del Estado, debemos afirmar que resultaría improcedente que esta se configure, tal y como se evidenciará a través de los medios exceptivos de fondo que pasan a proponerse.

V. Excepciones previas

1. Caducidad del medio de control

Como se expuso en el pronunciamiento sobre los hechos, el demandante no conoció los supuestos hechos dañosos que alega en el mes de diciembre de 2022. Contrario a lo que afirma, es claro que estas mismas reclamaciones las viene

¹ Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de noviembre 8 de 2007, Exp. 15971, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

² Sección Tercera, sentencia de 29 de enero de 2009, M.P. Dr. RAMIRO SAAVEDRA BECERRA Rad. No. 25000-23-26-000-1994-00054-01(16576).

³ Sección Tercera, Subsección "A". Sentencia de 22 de octubre de 2015. Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA. Radicación número: 52001-23-31-000-2006-00838-01(39045) A.

realizando a las demandadas desde el año 2020. Veamos los documentos que se aportan como pruebas documentales, que acreditan que el conocimiento de los hechos provino de fechas anteriores a las que pretende exponer el demandante.

- Petición de 1º de octubre de 2021, en la que reclama el mismo acceso a la vivienda y la limpieza por caída de rocas. Prueba 12.
- “Registro de Visita” de fecha 12 de noviembre de 2021, que se aporta como Prueba 3, que contiene las mismas reclamaciones exigidas en la demanda.
- Petición de 1º de diciembre de 2021, en la que solicita limpieza de rocas, y problemas con una alcantarilla, que también se reclama en esta demanda. Prueba 13.
- Petición de 12 de julio de 2021, en la que solicita el retiro de escombros. Prueba 12.
- Petición de 6 de julio de 2020, en la que solicita los accesos a los inmuebles de su propiedad. Prueba 9.
- Petición de 24 de febrero de 2020, en la que solicita la limpieza de los lotes. Prueba 8.

Así las cosas, si tenemos presente que la solicitud de conciliación prejudicial, con la que el actor pretendió interrumpir el término de caducidad, se radicó el **13 de diciembre de 2023**, resulta claro que, para esa fecha, ya habían transcurrido más de dos (2) años desde el momento en que el demandante conoció los hechos que ocasionar los presuntos daños cuya reparación reclama.

2. Haberse presentado la demanda sin el juramento estimatorio, cuando este sea exigido.

El artículo 206 del CGP establece que:

- En los procesos en los que se reclamen sumas de dinero o indemnizaciones de perjuicios, el demandante debe incluir en la demanda un juramento estimatorio, en el cual manifieste que el monto reclamado corresponde a una estimación razonable de los perjuicios sufridos.
- Este juramento tiene como finalidad garantizar que las pretensiones económicas sean proporcionales y razonables, evitando reclamaciones arbitrarias o desproporcionadas.

La demanda que nos ocupa se limita a indicar que el supuesto canal de encause tiene un valor de \$60.000.000, sin explicar, de manera razonable y proporcionada, de dónde se obtiene este valor. Así las cosas, bajo el entendido de que el autor no sustentó adecuadamente los perjuicios que reclama, y no allegó prueba pericial que

los soportara, la demanda debe ser rechazada, al menos, en lo que respecta a este componente.

VI. Excepciones de mérito

1. Ausencia de falla del servicio

La falla del servicio se ha entendido como la ocurrencia de una violación del contenido obligacional a cargo del Estado, que se puede derivar de textos legales o reglamentarios, o de la función genérica que tiene el Estado y se encuentra consagrada en el artículo segundo de la Constitución Política de Colombia de 1991.

El Consorcio SH, en su calidad de contratista de la Concesionaria Vial Unión del Sur, y en estricto cumplimiento de lo consagrado en los contratos suscritos, tiene obligaciones relacionadas con el diseño y construcción de la vía entregada en concesión. Dentro de estas obligaciones se encuentra, la Concesionaria Vial Unión del Sur, y su contratista (Consortio SH) deben mantener la vía en las mejores condiciones de seguridad para los usuarios, sin embargo, se debe reiterar que, la relación con el Estado obedece a un vínculo meramente contractual y, por tanto, no tiene, entre sus facultades y obligaciones, el asumir o velar por responsabilidades que rebasen el objeto contractual, menos aún, dar cumplimiento a la función administrativa o la prestación de un servicio público bajo el esquema que le es exigible a la Administración.

En línea con lo expuesto, no puede entenderse que dentro de las obligaciones contractuales se encuentre la de acceder a cualquier requerimiento de los propietarios de los inmuebles que resulten impactados por el proyecto. En el caso que nos ocupa, la realización de obras civiles que considere un particular, o el retiro de rocas que ya han sido retirados, o la reparación de cercas que no han sido afectadas, jamás pueden ser una obligación del Estado, ni mucho menos, de los subcontratistas, como es el caso de Sacyr, integrante del Consorcio SH.

Si la intención de la parte actora era evidenciar que lo anterior es una obligación real a cargo de la parte pasiva, debió demostrar los requisitos que la jurisprudencia exige para ello, es decir, explicar: 1. Si cada particular puede lograr que el Estado y los contratistas deben adecuar los predios al antojo de los particulares propietarios. 2. Que efectivamente, es exigible lo anterior a las demandadas y la forma en que tal evento puede ser verificado por parte del Estado.

Los anteriores requisitos fueron omitidos en la demanda, y no se pueden deducir del texto de la misma. Adicionalmente, como es fácil concluir, al Estado, a la concesionaria y a Sacyr, como integrante del Consorcio SH, no se le pueden atribuir los niveles de actuación que exige la parte demandante, porque superan lo legalmente posible.

De esta manera queda evidenciado que no existe falla del servicio, pues la administración, sus contratistas y subcontratistas no están obligados a actuar por

encima de lo que la ley y las cláusulas contractuales exigen. Si bien, un proyecto vial implica la generación de afectaciones a los predios contiguos a la vía, estos fueron compensados al demandante en su momento, y las reclamaciones que acá se evidencian corresponden a un intento del demandante por obtener un provecho económico que no le corresponde.

2. Ausencia de pruebas sobre la existencia del daño

Como se expuso en el pronunciamiento sobre los hechos y pretensiones de esta demanda, la parte actora omite acreditar la causación de los daños cuya reparación reclama.

En cuanto a la indemnización por el retiro de escombros, es claro que estos fueron retirados en su momento, y que lo pretendido no es nada diferente que un intento de enriquecerse sin causa legal válida. Es decir, no se acreditó que las rocas que están en el predio correspondan a una intervención de Sacyr o de las demandadas, por eso, la presunción es que aquellas que puedan encontrarse allí no son nada distinto que las propias de un terreno rocoso, como el que predomina en la zona.

Sobre los daños relacionados a las cercas o alambres, no existe una sola prueba que acredite su existencia previa al inicio de las obras, y mucho menos, que estas se hayan visto afectada por la acción de Sacyr o de cualquiera de los demandados.

El canal de encause reclamado no puede ser costado por la Nación a través de la obra que se realiza, pues se trata de una adecuación en un predio particular, que no tiene ninguna relación con los trabajos realizados en ejecución del Contrato de Concesión. El demandante es propietario de un inmueble por donde deben correr aguas lluvia y demás, y será su responsabilidad realizar las obras que el inmueble demande por su condición o ubicación natural. En este orden de ideas, no puede considerarse como daño el hecho de que alguien quiera mejorar su predio aprovechando una intervención vial, a pesar de que la condición de ser corredor de aguas lluvia no depende de la intervención de mi representada, sino de la condición natural del predio. Por el contrato, de la ficha predial (Prueba 7) se puede ver que el mismo canal natural que reclama el propietario del predio como ocasionado por la intervención de las demandadas, existía desde el momento previo al inicio de la intervención.

El predio con matrícula 244-930331 no ha quedado comunicado, por el contrario, como se evidencia con las imágenes que se aportan como Prueba 18, este cuenta con un acceso y está siendo explotado económicamente. Debería demostrar el demandante que el inmueble, no solo contaba con un acceso previo, sino que actualmente no lo tiene. Por eso, al evidenciar que no existe prueba de la existencia del acceso antes del inicio de las obras (porque jamás lo pudo demostrar a mi poderdante) y al validar que en las imágenes tomadas en el año 2024 (Prueba 18) reflejan la existencia del mencionado acceso, se podrá entender que la falencia probatoria de la parte actora es de dimensiones importantes.

Finalmente, sobre el valor de las mangueras y mano de obra del supuesto sistema de riego, se insiste en que no existe una sola prueba de que este existiera y, menos aún, de que fuera afectado por la obra realizada en ejecución del Contrato de Concesión. Adicionalmente, como se entiende de las Pruebas 4 y 5, el demandante ya recibió una compensación por las mismas mangueras en el año 2019, y lo que ahora pretende es volver a cobrar esa suma de dinero, argumentando, sin sustento alguno, que el inmueble no cuenta con agua.

Así las cosas, al no encontrarse acreditado el daño, falla uno de los elementos principales de la responsabilidad extracontractual que pueda dar origen a un fallo condenatorio.

3. Ausencia de nexo causal

De la mano con lo expuesto anteriormente, el demandante omite demostrar la relación que existe entre la intervención de Sacyr, como miembro del Consorcio SH, y los daños relacionados con los supuestos daños a cercas, existencia de un canal natural de aguas lluvia, presencia de rocas en un sector rocoso por naturaleza, o la presunta falta de agua en un predio que, por su altura, no puede acceder a una fuente de agua natural a menos que se implemente un sistema real de riego.

El sustento jurisprudencial del nexo causal en la responsabilidad extracontractual del Estado en Colombia ha sido desarrollado ampliamente por el Consejo de Estado, especialmente en su Sección Tercera. Este elemento es esencial para establecer la relación entre el daño antijurídico y la acción u omisión imputable al Estado.

Es así que el Consejo de Estado ha señalado que el nexo causal es el vínculo necesario entre el daño antijurídico y la acción u omisión del Estado. Este vínculo debe ser probado para que se configure la responsabilidad patrimonial del Estado.

En Sentencia del 11 de mayo de 2006, Exp. 14400, Magistrado ponente: Enrique Gil Botero, el Consejo de Estado destacó que la demostración del nexo causal debe realizarse a través de medios probatorios que permitan establecer la relación directa entre el daño y la conducta estatal.

En el mismo sentido, en Sentencia del 19 de abril de 2012, Exp. 19031, Magistrado ponente: Hernán Andrade Rincón, en esta sentencia de unificación, el Consejo de Estado reafirmó la importancia del nexo causal como elemento esencial de la responsabilidad extracontractual del Estado, aunque se centró principalmente en los títulos de imputación.

Finalmente, en Sentencia del 23 de agosto de 2012, Exp. 25000-23-26-000-1997-04845-01, Magistrado ponente: Danilo Rojas Betancourth, el Consejo de Estado analizó la relación de causalidad en el marco de la responsabilidad estatal, destacando que el daño debe ser consecuencia directa de la acción u omisión imputable al Estado.

4. Mala fe - Abuso del derecho

Como se ha presentado en el pronunciamiento sobre los hechos, la parte actora ha presentad pruebas documentales alteradas y descontextualizadas, para afirmar que la realidad de su predio es diferente a la que evidencia quien tanga acceso a este. Así se refleja en las Pruebas 17 y 18.

No debe perder de vista el Despacho que el demandante ha optado por alterar la fecha de conocimiento de los hechos que dieron origen a la demanda, con el único fin de distraer la real fecha de caducidad del medio de control que nos ocupa.

Estas dos evidencias, junto con las expuestas a lo largo de la contestación de la demanda, deben permitirle al Despacho concluir que existe mala fe en su actuar y deslealtad procesal máxima.

VII. Pronunciamiento sobre las pruebas aportadas con la demanda

Las fotografías deben entenderse como documentales manipuladas por la parte actora, que no permiten identificar las circunstancias de tiempo y lugar en que, supuestamente, fueron tomadas.

La inspección judicial resulta innecesaria, toda vez que con esta contestación se aportan las imágenes que le permitirán al Despacho conocer la realidad del inmueble, sin necesidad de desplazar la actividad judicial hasta los predios de la parte actora.

Sobre los testimonios solicitados, el Despacho debe observar que el demandante omitió dar cumplimiento a uno de los requisitos formales de la prueba testimonial, consistente en indicar la dirección en la que los testigos deben ser citados por el Despacho. Con ello se contraviene lo dispuesto por el artículo 212 del C.G.P. que dispone: *“Cuando se pidan testimonios deberá expresarse el nombre, **domicilio, residencia o lugar donde pueden ser citados los testigos**, y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba”*. (negrillas propias)

La omisión de este requisito conlleva a su rechazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 213 del C.G.P. según el cual *“Si la petición reúne los requisitos indicados en el artículo precedente, el juez ordenará que se practique el testimonio en la audiencia correspondiente”*. Lo que a contrario sensu significa que, si la prueba no reúne todos los requisitos, el Juez no podrá ordenar su práctica, por tratarse de una norma de orden público que no admite interpretación o pacto en contrario.

VIII. Pruebas solicitadas con la contestación

Sacyr solicita se tengan como pruebas las siguientes:

1. Documentales:



- Prueba 1.** Acuerdo Consorcial y Otrosí No. 1.
- Prueba 2.** Contrato de Concesión y Apéndice Técnico.
- Prueba 3.** Registro de visita del 12 de noviembre de 2021.
- Prueba 4.** Contrato de transacción de 2019 y soporte de pago 1.
- Prueba 5.** Contrato de transacción de 2019 y soporte de pago 2.
- Prueba 6.** Contrato de transacción de 2021.
- Prueba 7.** Expediente - RUPA 2-0090-B FICHA APROBADA 12-AGO-19.
- Prueba 8.** Petición febrero 24 de 2020.
- Prueba 9.** Petición 6 de junio de 2020.
- Prueba 10.** Petición 22 de julio de 2020.
- Prueba 11.** Petición de 12 de julio de 2021.
- Prueba 12.** Petición 1º de octubre de 2021.
- Prueba 13.** Petición 1º de diciembre de 2021.
- Prueba 14.** Respuesta a petición de 17 de agosto de 2020.
- Prueba 15.** Respuesta a petición de 27 de julio de 2021.
- Prueba 16.** Respuesta a petición de 23 de noviembre de 2021.
- Prueba 17.** Imágenes de 2024 correspondientes al predio con folio 93030.
- Prueba 18.** Imágenes de 2024 correspondientes al predio con folio 93031.
- Prueba 19.** Modificación al contrato de diseño y construcción.

2. Interrogatorio de parte:

Se solicita se decrete y practique el interrogatorio de parte del demandante **SEGUNDO VICTOR PANTOJA JURADO**, quien puede ser contactado a través de su apoderado, o directamente, en las direcciones indicadas en la demanda.

Objeto del interrogatorio. El interrogado informará al Despacho sobre los hechos en los que se basa la demanda y aquellos que soportan las excepciones formuladas en el presente escrito.

3. Declaración de parte.



Solicito que se decrete y practique la declaración de parte del representante legal del Consorcio SH, ingeniero **JOSÉ IGNACIO SANZ DELGADO**, identificado con C.E. No. 558.811, o quien haga sus veces, quien puede ser contactado en el correo electrónico jsanz@sacyr.com.

Objeto de la declaración. El declarante informará al Despacho sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrolló el proceso de celebración y ejecución del contrato de arrendamiento y las razones por las que el Consorcio no lo ha incumplido.

4. Testimonios

Solicito que se decrete y practique el testimonio del representante legal del Consorcio SH, ingeniero **JOSÉ IGNACIO SANZ DELGADO**, identificado con C.E. No. 558.811, o quien haga sus veces, quien puede ser contactado en el correo electrónico jsanz@sacyr.com.

Objeto de la declaración. El declarante informará al Despacho sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desarrollaron las obras relacionadas con los predios objeto de esta demanda y el estado en que se encuentra el inmueble actualmente.

IX. Anexos

Se anexan a esta contestación los siguientes documentos:


- Poder otorgado al abogado que suscribe la presente contestación, que fueron remitidos previamente al correo Despacho.
- Los anunciados en el acápite de pruebas.

VIII. Notificaciones

El suscrito puede ser notificado en el correo electrónico wgomez@gomezhigueraasociados.com.

Consorcio SH puede ser notificado en el correo electrónico jsanz@sacyr.com.

Cordialmente,


Wilson Gómez Higuera
C.C. No. 79.950.684
T.P. No. 115.907 del C. S. de la J.